

Cuadernos Europeos de Deusto

No. 73/2025

DOI: <https://doi.org/10.18543/ced732025>

CRÓNICA

Actualidad institucional y económica de España en el marco de la Unión Europea (julio de 2025)

Pablo Rodríguez Talavera

doi: <https://doi.org/10.18543/ced.3355>

Publicado en línea: octubre de 2025

Derechos de autoría y de explotación

Los autores conservan sus derechos de autor sobre los trabajos publicados en Cuadernos Europeos de Deusto (CED). Además, pueden disponer de sus publicaciones para depositarlas en repositorios, páginas web personales, cursos o como base para futuras publicaciones, siempre que se cite adecuadamente la fuente original. Al enviar un artículo para su revisión y publicación en CED, los autores ceden a la Universidad de Deusto derechos de explotación, incluyendo distribución, comunicación pública, reproducción e inclusión en cualquier tipo de soporte, en particular en bases de datos en las que esta revista está indexada y en el repositorio institucional de la Universidad de Deusto. Los autores garantizan que no se han otorgado ni se otorgarán permisos o licencias de cualquier tipo que puedan violar los derechos otorgados a la Editorial. CED es una revista de acceso abierto, lo que garantiza el acceso gratuito, inmediato y permanente al contenido digital de todos sus números. Los lectores pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos sin fines comerciales y sin necesidad de autorización previa, siempre que se cite adecuadamente el trabajo original. Cualquier otro uso de su contenido en cualquier medio o formato, ahora conocido o desarrollado en el futuro, requiere el permiso previo por escrito del titular de los derechos de autor. En particular, no se podrán aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras personas a hacer cualquier uso permitido por esta licencia.

Copyright and exploitation rights

Authors retain their copyright on works published in Cuadernos Europeos de Deusto (CED). Moreover, they may make their publications available for deposit in repositories, personal websites, courses or as a basis for future publications, provided that the original source is properly cited. By submitting an article for review and publication in CED, authors grant the University of Deusto exploitation rights, including distribution, public communication, reproduction and inclusion in any type of medium, particularly in databases in which this journal is indexed and in the institutional repository of the University of Deusto. Authors guarantee that no permissions or licences of any kind have been or will be granted that may violate the rights granted to the Publisher. CED is an open access journal, which guarantees free, immediate and permanent access to the digital content of all its issues. Readers may read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts for non-commercial purposes and without prior authorisation, provided that the original work is properly cited. Any other use of its content in any medium or format, now known or developed in the future, requires the prior written permission of the copyright holder. In particular, no legal terms or technological measures may be applied that legally restrict other persons from making any use permitted by this licence.

Actualidad institucional y económica de España en el marco de la Unión Europea (julio de 2025)

Pablo Rodríguez Talavera

Profesor de Deusto Business School, Universidad de Deusto (España)

doi: <https://doi.org/10.18543/ced.3355>

Publicado en línea: octubre de 2025

Sumario: I. El Estado de la Integración. 1. Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea: Polonia. 2. Proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia. 3. Aplicación del Pacto de Migración y Asilo. 4. Estado de la Unión y prioridades estratégicas. 5. Cooperación estructurada permanente (PESCO) y defensa europea.—II. Cuestiones generales de la actualidad económica. 1. Política monetaria y bajada de tipos del BCE. 2. Reforma del Pacto de Estabilidad y Gobernanza Económica. 3. Reforma del mercado eléctrico europeo. 4. Estrategia industrial y competitividad europea. 5. Ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia. 6. Mercado laboral y productividad. 7. Autonomía digital y regulación tecnológica. 8. Transición energética y climática. 9. Fiscalidad verde y sostenibilidad presupuestaria. 10. Integración financiera y Unión de Mercados de Capitales.

Resumen: Durante el primer semestre de 2025, la Unión Europea ha atravesado un periodo de transición clave: la presidencia rotatoria polaca ha puesto el acento en seguridad y competitividad, el Banco Central Europeo ha continuado el ciclo de bajadas de tipos, y la reforma del mercado eléctrico ha consolidado un nuevo marco de protección al consumidor. Para España, estos seis meses han significado aprovechar la apertura fiscal europea para sostener la inversión verde, reforzar su papel en la ampliación oriental y afianzar su liderazgo en energías renovables.

Al mismo tiempo, la agenda comunitaria ha exigido una coordinación sin precedentes entre instituciones, empresas y regiones: planes fiscales-estructurales a medida, despliegue del Pacto de Migración y Asilo, impulso de la Unión de Mercados de Capitales y primeros pasos prácticos del euro digital. Este informe examina cómo esas decisiones han impactado en la economía española y qué oportunidades y riesgos se vislumbran para el segundo semestre del año.

Palabras clave: Política económica europea, Presidencia polaca, Reforma eléctrica, BCE, Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), Transición energética.

Abstract: Throughout the first half of 2025, the European Union has entered a pivotal transition: Poland's rotating Presidency has prioritised security and competitiveness, the European Central Bank has continued the rate-cutting cycle, and the electricity-market reform has established stronger consumer protection. For

Spain, these six months have meant using the new fiscal framework to uphold green investment, strengthening its role in the eastern enlargement process and consolidating its leadership in renewables.

At the same time, the EU agenda has required unprecedented coordination among institutions, businesses and regions: tailor-made fiscal-structural plans, roll-out of the Migration and Asylum Pact, a fresh push for the Capital Markets Union and the first practical steps towards a digital euro. This report analyses how those decisions have affected the Spanish economy and what opportunities and risks lie ahead for the second half of the year.

Keywords: *EU economic policy, Polish Presidency, Electricity reform, ECB, Stability and Growth Pact (SGP), Energy transition.*

I. El estado de la integración

1. *Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea: Polonia*

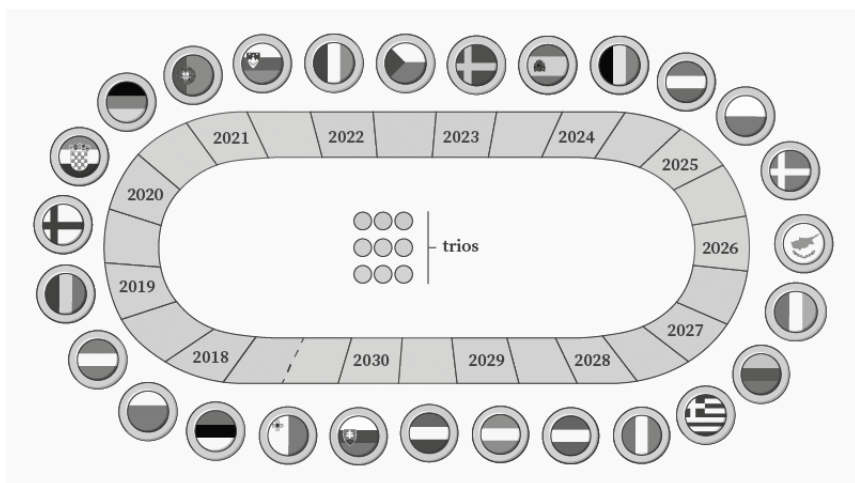
La presidencia polaca ha inaugurado 2025 con el lema «*Seguridad, Competitividad, Cohesión*», reflejando tanto su realidad geopolítica como sus ambiciones económicas. Desde enero, Varsovia ha impulsado un calendario intenso de Consejos formales e informales, priorizando la industria de defensa, la política de cohesión y la simplificación regulatoria para pymes. El programa semestral, publicado en la web del Consejo, ha señalado que la autonomía estratégica europea debe apoyarse en cadenas de valor resilientes y en una coordinación presupuestaria que no socave la convergencia. (Ver más en: <https://polish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/>)

España ha acogido positivamente el enfoque porque coincide con sus propias prioridades de reindustrialización y cohesión territorial. El Ministerio de Industria español ha participado de forma activa en las reuniones del Consejo Competitividad, subrayando que la reducción de plazos para licencias industriales beneficiará especialmente a regiones en transición energética. Paralelamente, la Secretaría de Estado para la UE ha coordinado reuniones preparatorias con comunidades autónomas para alinear posiciones antes de cada encuentro ministerial.

En materia de seguridad y defensa, la presidencia convocó en abril un Consejo informal en Varsovia centrado en movilidad militar y logística dual. España ha aportado su experiencia portuaria y ha propuesto usar puertos de la fachada atlántica en ejercicios de despliegue rápido, lo que ha reforzado la visibilidad del país como hub logístico. El Ministerio de Defensa polaco, en su comunicado final, ha destacado la interoperabilidad con socios mediterráneos como elemento clave para la cohesión transatlántica.

La competitividad industrial ha ocupado también la agenda económica. En la conferencia «EU Industrial Days» de junio, la presidencia ha presentado una propuesta piloto de ventanilla única para grandes proyectos Net-Zero con un compromiso de respuesta administrativa en 12 meses. El vicepresidente de la Comisión responsable de Industria ha respaldado la iniciativa y ha invitado a los Estados a adoptar estándares comunes. España ha anunciado que replicará el modelo en sus propias «oficinas de aceleración» autonómicas.

Polonia ha defendido la continuidad de la política de cohesión en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) y ha pedido un fondo pre-cohesión para los países candidatos. España ha coincidido, señalando que la ampliación no debería restar recursos a las regiones más vulnerables de la península. El debate se ha cristalizado en un documento de trabajo que la Comisión presentará oficialmente en otoño.



Fuente: <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/>

Por último, la relación con el Parlamento Europeo ha resultado fluida: la ministra polaca de Asuntos Europeos ha comparecido dos veces ante la Comisión AFCO para explicar logros y retos. En junio, Varsovia ha entregado un balance intermedio que recoge 32 acuerdos parciales generales y destaca el progreso en los dosieres de energía, mercado interior y gobernanza económica. Madrid ha elogiado la eficacia negociadora de la presidencia, subrayando que la coordinación con el trío Polonia-Dinamarca-Chipre «ha sentado bases sólidas» para el segundo semestre.

2. Proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia

En el primer semestre de 2025 la Comisión ha completado el «screening» horizontal y técnico de diez capítulos del acervo para Ucrania y Moldavia. Los equipos negociadores han celebrado en Bruselas y Luxemburgo más de 40 reuniones temáticas, centradas sobre todo en estadística, ciencia e investigación, medio ambiente y mercado interior. A mediados de marzo, el Consejo de Asuntos Generales ha tomado nota del progreso y ha encargado hojas de ruta detalladas por capítulo. (Ver más en: <https://newunionpost.eu/2025/05/20/ukraine-first-cluster-eu-accession/>)

España ha reforzado su presencia institucional abriendo un «desk» específico en su Representación Permanente ante la UE para seguimiento de la ampliación oriental. Además, ICEX ha organizado dos misiones empresariales a Kiev enfocadas en rehabilitación de infraestructuras ferroviarias y energías limpias. Desde la AECID se ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio ucraniano de Infraestructura para cooperar en gestión de residuos bélicos y reconstrucción urbana resiliente.

El componente presupuestario ha suscitado debate. En abril, la Dirección General de Presupuesto ha presentado un estudio preliminar que estima un impacto neto de 0,1% del PIB europeo anual si Ucrania ingresa antes de 2030. España ha advertido que la cifra podría variar según la evolución de la guerra y ha defendido un «instrumento de pre-cohesión rural» para modernizar el sector agrario ucraniano sin detraer recursos de la PAC actual. Alemania y Francia han expresado interés en explorar la idea.

Políticamente, la presidencia polaca ha mantenido la cohesión frente a la amenaza rusa. El Consejo Europeo de marzo ha aprobado una prolongación del paquete macrofinanciero para Kiev y ha instado a Moldavia a agilizar reformas judiciales antes de otoño. España ha apoyado ambas decisiones y ha ofrecido expertos del Consejo General del Poder Judicial para talleres de independencia judicial. (Ver más en: <https://newunionpost.eu/2025/05/20/ukraine-first-cluster-eu-accession/>)

La sociedad civil también ha jugado su papel. ONGs españolas han puesto en marcha proyectos de atención psicosocial para desplazados ucranianos reubicados en la UE, y varias universidades han ampliado plazas Erasmus + para estudiantes de ambos países. Dichas iniciativas han contribuido a consolidar la dimensión humana de la ampliación.

Cerrando junio, la Comisión ha confirmado que los primeros capítulos de negociación formales (estadística y ciencia) podrían abrirse en septiembre si se completan ciertos indicadores de Estado de Derecho. España ha reiterado su disposición a facilitar asistencia técnica y a impulsar una conferencia de donantes para infraestructura crítica en Odesa.

3. *Aplicación del Pacto de Migración y Asilo*

El nuevo Pacto de Migración y Asilo ha iniciado su despliegue operativo en febrero. Los veintisiete Estados han remitido sus Planes Nacionales de Solidaridad: 19 combinan acogida de solicitantes y contribución financiera, y ocho optan casi exclusivamente por la vía económica. España ha

presentado un modelo mixto —reubicación y fondos— subrayando la importancia de compartir responsabilidades.

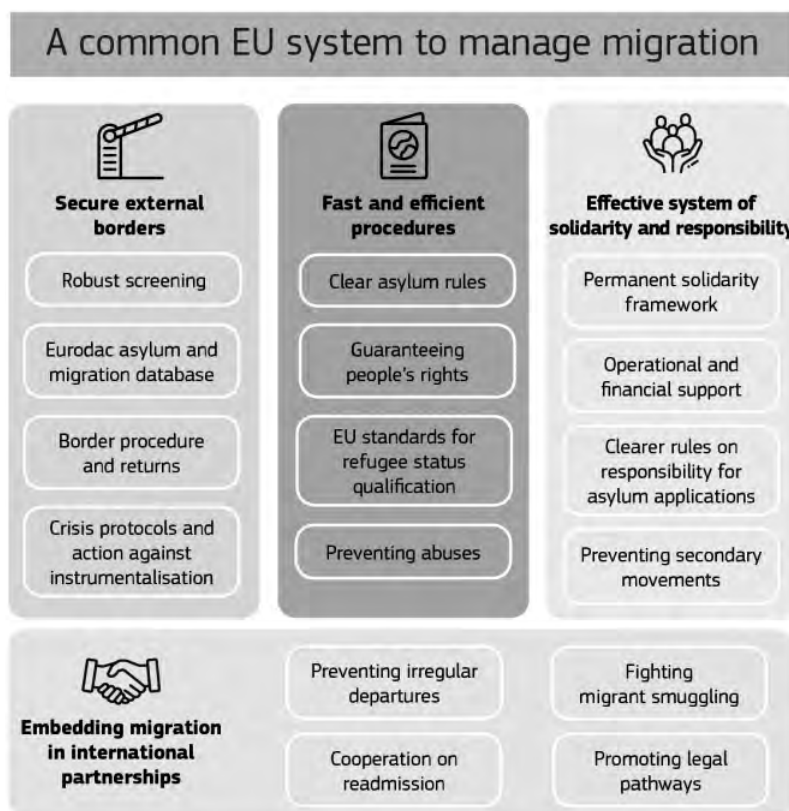
La Agencia Europea de Asilo (EUAA) ha desplegado equipos en Canarias y en la isla italiana de Lampedusa para implementar los procedimientos en frontera reforzados. Interior ha digitalizado los expedientes de asilo y ha enlazado su sistema con la nueva plataforma Eurodac 2, reduciendo los tiempos de registro a menos de 48 horas. Las autoridades locales han destacado la mejora, aunque ONGs piden reforzar la asistencia jurídica.

El mecanismo de «contribución sustitutoria» ha centrado el debate ministerial. España ha defendido ajustar la cuantía al PIB per cápita, argumentando que una cifra fija puede ser regresiva. Polonia y Hungría han preferido mantener un importe estándar. La presidencia polaca ha encargado a la Comisión un informe de impacto que se discutirá en octubre.

En marzo, el Fondo para la Gestión Integrada de Fronteras ha liberado recursos adicionales para infraestructuras de control en el Estrecho. El Gobierno español ha destinado parte de la financiación a modernizar el Centro de Coordinación SIVE en Cádiz e instalar nuevos sensores en la costa granadina. Frontex ha elogiado la actualización tecnológica como ejemplo de buenas prácticas. (Ver más en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767218/EPRS_BRI%282025%29767218_EN.pdf)

Paralelamente, se ha reforzado la dimensión externa. Bruselas ha ampliado el acuerdo de movilidad legal con Egipto, incluyendo plazas para migración circular en agricultura y turismo. España ha anunciado 1 500 visados anuales en ese marco, condicionados a formación previa en el país de origen.

La Comisión ha prometido publicar antes de verano orientaciones para garantizar derechos fundamentales en los nuevos procedimientos de frontera. El Defensor del Pueblo español ha valorado la intención y ha solicitado participar en la fase de consulta pública.



Fuente: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_en

4. Estado de la Unión y prioridades estratégicas

Entre enero y junio la Comisión ha organizado cinco talleres temáticos y un retiro ministerial en Varsovia para perfilar el discurso que Ursula von der Leyen pronunciará en septiembre. Las grandes líneas —competitividad, seguridad, autonomía energética y gobernanza de la IA— han sido validadas por los Estados miembros.

España ha propuesto incluir un apartado específico de cohesión social y ha presentado un non-paper respaldado por Portugal, Grecia y Croacia. Fuentes de la Secretaría General de la Comisión han confirmado que la idea «ha ganado» tracción y que el borrador preliminar ya incorpora referencias al Pilar Europeo de Derechos Sociales.

En abril, la Dirección General de Presupuesto ha encargado un estudio sobre el impacto de la ampliación en el MFP 2028-2034. El análisis preliminar ha indicado la necesidad de nuevos recursos propios, entre ellos la posible extensión del mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Hacienda española ha visto con buenos ojos la propuesta, siempre que se garantice que la industria nacional no sufra desventajas competitivas.

Von der Leyen ha sostenido dos reuniones bilaterales con la presidencia polaca; en ambas ha reconocido la prioridad que Varsovia otorga a la autonomía energética. Madrid ha coincidido y ha recordado que los corredores de hidrógeno peninsulares pueden jugar un papel clave.

El Parlamento Europeo ha adoptado en mayo una resolución exhortando a la Comisión a intensificar la lucha contra la desinformación de cara a las elecciones de 2026. Eurodiputados españoles han impulsado enmiendas para financiar un observatorio europeo de algoritmos. La Comisión ha prometido evaluar la propuesta.

A finales de junio, la Secretaría General ha confirmado que el borrador final se presentará al Colegio de Comisarios el 28 de agosto. Von der Leyen ha indicado que el discurso tendrá un enfoque «audaz, pero anclado en la responsabilidad fiscal», cumpliendo la línea que la Comisión ha mantenido en todo el semestre. (Ver más en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/speech_25_404)

5. Cooperación estructurada permanente (PESCO) y defensa europea

El Consejo de Asuntos Exteriores (Defensa) del 20 de mayo ha revisado la lista de proyectos PESCO y ha declarado nueve de ellos «de alta prioridad». Entre ellos figura el Sistema Europeo de Vigilancia Marítima, donde España ha aportado patrulleros y experiencia en sensores costeros.

La Agencia Europea de Defensa ha lanzado en abril un programa de compras conjuntas de munición inteligente. España ha mostrado interés, siempre que la inversión se considere estratégica y pueda beneficiarse de un tratamiento fiscal favorable. Algunos Estados «frugales» han solicitado un techo de gasto; la discusión se retomará en otoño.

En materia de sostenibilidad, Bruselas ha abierto consulta sobre clasificar ciertos proyectos militares como «verdes» si reducen huella de carbono. Madrid ha apoyado la idea y ha ofrecido datos de su programa de fragatas F-110, que incorpora sistemas de propulsión híbrida.

El BEI presentó en junio su primera línea piloto de crédito para industria dual de bajas emisiones. Fabricantes aeronáuticos españoles han mostrado interés en financiar prototipos de drones de observación con celdas de combustible.

Durante la primera mitad del año la OTAN ha ejecutado el ejercicio «Steadfast Defender 25»; contingentes españoles han participado en maniobras logísticas en Polonia, demostrando interoperabilidad. La ministra de Defensa española ha subrayado que la cooperación UE-OTAN «ha alcanzado» un nivel de coordinación sin precedentes.

Cerrando el semestre, la presidencia polaca ha anunciado una conferencia de alto nivel sobre clima y defensa para septiembre, invitando a España a co-presidir un panel sobre combustibles sintéticos. Madrid ha aceptado y ha adelantado que presentará proyectos de biocombustibles navales desarrollados en Cartagena. (Ver más en: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/27/eu-defence-readiness-council-launches-6th-wave-of-new-pesco-projects/>)

II. Cuestiones generales de la actualidad económica

1. *Política monetaria y bajada de tipos del BCE*

El Banco Central Europeo ha culminado en junio su giro acomodaticio al fijar la facilidad de depósito en el 2%, tras dos recortes consecutivos desde marzo. Christine Lagarde ha insistido en que se trata de una «normalización ordenada» apoyada en la caída de la inflación subyacente al entorno del 2%. Según el Monetary Policy Statement de 5-VI-2025, la institución ha señalado que el mercado laboral sigue tensionado, pero los riesgos de segunda ronda se han moderado gracias a la contención de expectativas salariales. (Ver más en: <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ecb.mp250306~d4340800b3.en.html>)

Para España, la bajada ha supuesto un alivio financiero tangible. El Tesoro ha colocado letras a doce meses por debajo del 2,4% frente al 3% de enero, reduciendo la factura de intereses y facilitando el calendario de emisiones ligado al Plan de Recuperación. Las familias con hipotecas variables han empezado a notar descensos de 35-40 € mensuales, mientras las pymes exportadoras han renegociado líneas de circulante con spreads 50 puntos básicos menores. No obstante, el Banco de España ha advertido de que el crédito al consumo crece por encima del 9% interanual y exige seguimiento.

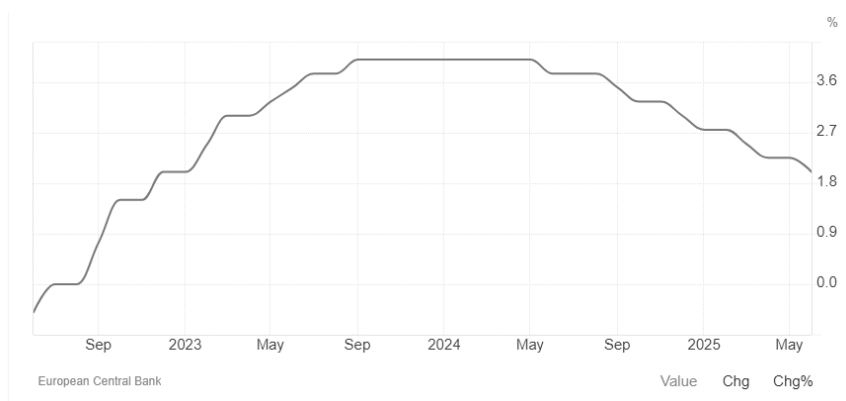
En el plano bancario, la mayor liquidez ha permitido a las entidades lanzar hipotecas mixtas «3+27» con tipos de arranque inferiores al 2,5%; la competencia se ha trasladado a préstamos verdes, donde Santander y Caixa-Bank han inaugurado productos que bonifican viviendas con certificado energético A. El Mecanismo Único de Supervisión ha alentado la tendencia, recordando que los activos alineados con la transición reciben mejores ponderaciones de riesgo.

Los gobiernos periféricos, incluida España, han aprovechado la ventana de tipos bajos para alargar la duración media de la deuda. El Tesoro ha emitido un bono verde a 20 años con demanda de cuatro veces la oferta, lo que ha confirmado el apetito inversor por papel soberano alineado con la Agenda 2030. Economistas recuerdan que cada décima de Euríbor ahorrada equivale a unos 1 100 millones al año en intereses estatales —margen que el ministerio de Hacienda pretende destinar a amortizar deuda.

Aun así, el debate sobre la «pausa» de julio ha dividido al consejo: los gobernadores de Países Bajos y Austria han defendido esperar nuevos datos de salarios, mientras España y Francia han apoyado una tercera bajada si el IPCA se consolida. El BCE ha reiterado que su hoja de ruta dependerá de la energía y de la guerra de Ucrania; un repunte del crudo por tensiones en Oriente Medio obligaría a recalibrar.

Los sindicatos españoles, al renegociar convenios, han aceptado cláusulas de revisión salarial supeditadas a la inflación efectiva —no esperada—, señal de que la desindexación gana terreno. Por su parte, la CEOE ha puesto deberes: si los tipos siguen bajando quiere acelerar deducciones fiscales a I+D para sostener competitividad sin recurrir sólo al coste financiero.

En conclusión, la política monetaria europea ha entrado en fase de ajuste fino: suficiente flexibilidad para apuntalar el crecimiento, pero con el ojo puesto en desequilibrios sectoriales. España ha ganado margen presupuestario, pero el Gobierno sabe que la laxitud del BCE no exime de mantener la senda de consolidación pactada con Bruselas.



Fuente: <https://tradingeconomics.com/euro-area/deposit-interest-rate>

2. *Reforma del Pacto de Estabilidad y Gobernanza Económica*

El Reglamento de Gobernanza Económica ha entrado plenamente en vigor el 1-I-2025, sustituyendo al viejo Pacto de Estabilidad por planes fiscales-estructurales a medida. España ha remitido su documento el 17-V tras un proceso de consulta con comunidades autónomas y agentes sociales; el plan proyecta llevar el déficit al 3% en 2027 sin recortar inversión verde ni digital. Bruselas ha valorado el equilibrio entre ajuste y crecimiento, pero ha reclamado hitos claros en la reforma de pensiones y mercado laboral sénior.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha aplaudido la flexibilidad, pero ha pedido anclar las previsiones con cuadros de mando trimestrales públicos. En respuesta, Hacienda ha prometido publicar un «dashboard» ciudadano que muestre deuda, déficit e inversión estratégica en tiempo real, inspirándose en el Recovery and Resilience Scoreboard de la Comisión.

En el plano político interno, el Congreso convocó una sesión monográfica donde Gobierno y oposición coincidieron en preservar el gasto productivo, aunque discrepaban sobre los plazos de consolidación. Las autonomías reclamaron incentivos claros para proyectos cofinanciados y certezas sobre la regla de gasto subnacional, que ahora deberá alinearse con el techo agregado de la Administración Central.

El Eurogrupo ha debatido cómo etiquetar inversión estratégica. España, Francia e Italia han defendido incluir I+D, educación y defensa dual; Países Bajos y Suecia prefieren acotar a clima y digital. El compromiso provisional apunta a un catálogo amplio supervisado ex-post por la Comisión, con sanciones reputacionales si se incumpliera. Para Madrid, la clave será garantizar que la etiqueta no derive en «greenwashing fiscal». (Ver más en: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/preventive-arm/national-medium-term-fiscal-structural-plans_en)

La Comisión ha iniciado paralelamente conversaciones sobre nuevos recursos propios: la ampliación oriental y la política industrial exigen una partida estable. España ha sugerido ampliar la tasa de carbono en frontera e introducir un gravamen armonizado al plástico virgen. Alemania no lo descarta, pero exige seguridad jurídica para la industria.

Agencias de rating han acogido con cautela el nuevo marco: valoran la orientación al riesgo y la coherencia con la política monetaria, pero advierten de que la credibilidad dependerá de la ejecución. Por ello, Moncloa ha reiterado que su senda fiscal será refrendada por Presupuestos de ajuste gradual y revisiones semestrales en diálogo con la AIReF.

Cerrando el semestre, la Comisión ha anunciado que en octubre publicará la evaluación preliminar de todos los planes; de su dictamen dependerá el tono de los mercados para el último trimestre. España ha expresado confianza en superar el examen al haber ligado sus promesas a hitos del Plan de Recuperación y a la reforma del sistema de pensiones aprobada en marzo de 2023.

3. *Reforma del mercado eléctrico europeo*

El trílogo alcanzado el 21 de mayo de 2024 cerró la reforma del mercado eléctrico, centrada en blindar al consumidor frente a choques de precio y facilitar la inversión en renovables. Los contratos por diferencia (CfD) y los Power Purchase Agreements han ganado protagonismo; la norma obliga a los Estados a diseñar esquemas a largo plazo predecibles que establezcan ingresos de nuevas plantas eólicas, solares y nucleares.

Para España, el acuerdo ha supuesto la normalización de la llamada «cláusula ibérica», convertida ahora en salvaguarda excepcional para todo el bloque. El Ministerio de Transición Ecológica ha destacado que la península seguirá usando su singularidad mientras no logre interconexiones suficientes. De hecho, la Comisión ha incluido el proyecto Inelfe II —interconexión submarina cantábrica— en la lista PCI prioritaria, desbloqueando financiación del Mecanismo Conectar Europa.

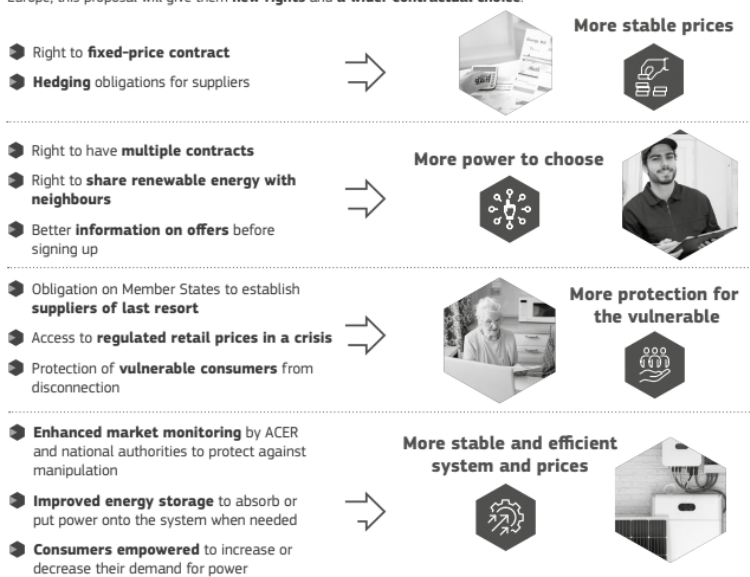
Las eléctricas españolas han reaccionado rápido: Iberdrola ha lanzado la primera subasta corporativa a 15 años para 600 MW fotovoltaicos, mientras Endesa ha anunciado CfD corporativos vinculados a nuevas plantas solares en Extremadura. Estas operaciones dan visibilidad a la cadena de suministro local y reducen la volatilidad de caja, argumento bien recibido por los analistas bursátiles.

El autoconsumo colectivo ha vivido un boom: con la reforma, las comunidades de vecinos pueden compartir excedentes sin peajes hasta 500 m de distancia, y los plazos de conexión se han recortado a menos de cuatro meses. La Asociación Nacional de Autoconsumidores estima que las instalaciones residenciales han duplicado la potencia registrada en el mismo semestre de 2024.

En paralelo, los reguladores han reforzado la protección al consumidor. Las comercializadoras deberán ofrecer al menos un contrato a precio fijo de un año y otro dinámico indexado por franjas horarias. La CNMC ha abierto un registro público en abril donde se comparan tarifas; la transparencia ha provocado la entrada de nuevas empresas «100% renovable» con ofertas competitivas.

CONSUMERS AT THE HEART OF THE REFORM: MORE PROTECTION AND EMPOWERMENT

To better protect consumers from high and volatile prices, such as those exacerbated by Russia's energy war against Europe, this proposal will give them **new rights** and **a wider contractual choice**:



Fuente: https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/electricity-market-design_en

Bruselas ha advertido que la intervención de precios sólo se autorizará en caso de choque extremo. El objetivo es evitar distorsiones permanentes que desincentiven la inversión. España, más interesada que nadie en atraer capital a renovables, ha apoyado mantener el mercado marginalista como señal de precio, siempre que los hogares vulnerables queden protegidos. (Ver más en: https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/electricity-market-design_en)

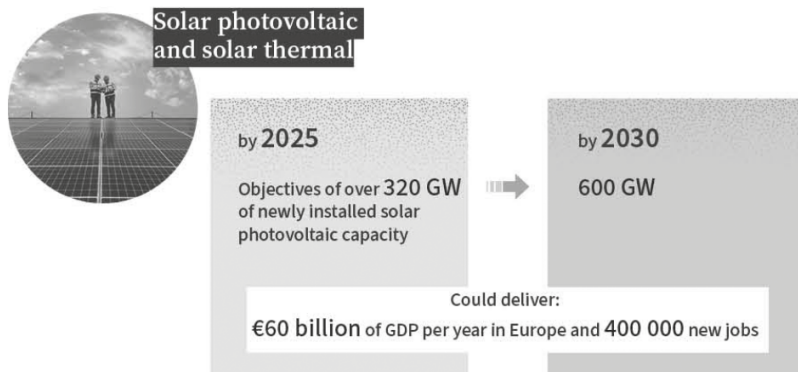
Por último, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ha ganado poderes para investigar la manipulación transfronteriza. Una unidad hispano-francesa investiga desde abril discrepancias de precios a uno u otro lado de la frontera vasca; los resultados se harán públicos antes de octubre.

4. Estrategia industrial y competitividad europea

La Comunicación «*Un Pacto para la Competitividad Europea*», publicada el 6-II, ha sentado las bases de la nueva política industrial comunitaria.

Establece diez indicadores («brújula») que miden desde el tiempo medio de permisos a la cuota de patentes deep-tech europeas. España ha recibido con agrado el foco en agilidad administrativa y ha anunciado un sistema de licencias exprés para proyectos estratégicos alineados con los PERTE. (Ver más en: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-plan/net-zero-industry-act_en)

Examples of strategic net-zero technologies



Fuente: <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/net-zero-industry-act/>

El Reglamento Net-Zero Industry Act, aprobado en marzo, ha fijado fabricar en la UE al menos el 40% de tecnologías limpias críticas en 2030. España ha aprovechado para reforzar su PERTE de Microelectrónica II: el consorcio liderado por Bosch y el CSIC ha confirmado que ubicará un centro de diseño de chips de potencia en Zaragoza. Paralelamente, el PERTE Biotech Industrial ha formalizado la construcción de una biorrefinería de PLA en Galicia, con 700 empleos previstos en fase de ejecución.

Las comunidades autónomas compiten por atraer mega fábricas de baterías. Aragón ha ofrecido incentivos fiscales e infraestructuras logísticas para un proyecto de cátodos LFP, mientras la Comunidad Valenciana ha reforzado su candidatura con infraestructuras portuarias y renovables baratas. El Gobierno central ha creado un «Fast Track» interministerial que promete autorización en menos de diez meses.

La Alianza Europea de Materias Primas Críticas ha firmado en abril un memorándum con España para acelerar el proyecto de litio en Cáceres y la planta de reciclaje de imanes permanentes en Euskadi. El acuerdo incluye un fondo de compensación social para garantizar empleo local y restauración ambiental, punto que ha aplacado parte de la oposición vecinal.

Los sindicatos han reclamado planes de formación y salarios dignos. El Ministerio de Trabajo ha lanzado un programa de bonos de capacitación dual, cofinanciado por el RRF, que integra módulos de IA industrial y mantenimiento de electrolizadores. Las patronales del metal ha aplaudido la iniciativa, pero piden que la formación se sincronice con la puesta en marcha de las plantas para no perder competitividad temporal.

Financieramente, el BEI ha anunciado en junio una línea de 3 000 millones para industria dual verde. Empresas aeroespaciales españolas, impulsadas por el hub de Getafe, ha empezado a preparar expedientes para drones de observación de emisiones. El Ministerio de Defensa respalda los proyectos como ejemplo de convergencia clima-defensa.

Queda por cerrarse el Fondo de Soberanía Europeo. España y Francia han defendido emitir deuda conjunta; Alemania prefiere redes nacionales cofinanciadas. La presidencia polaca ha propuesto una fórmula intermedia: garantías europeas sobre emisiones nacionales. El semestre termina sin acuerdo, pero Bruselas promete una propuesta legislativa antes de diciembre.

5. Ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia

A 30 de junio, España ha certificado el 57% de sus fondos RRF y ha desembolsado el 41%, cifras que la sitúan en el grupo medio-alto de ejecución europea. La Comisión, en su informe de primavera, ha reconocido avances en rehabilitación de vivienda y digitalización educativa, pero ha señalado retrasos en los PERTE Naval y Agroalimentario.

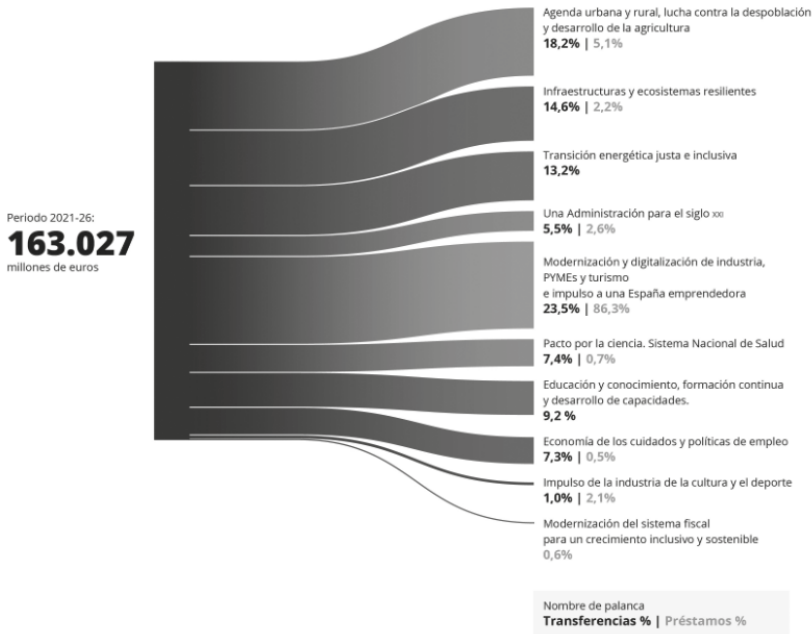
En respuesta, el Gobierno ha reforzado las unidades administrativas autonómicas con más de 1 600 técnicos y ha simplificado la justificación de gasto a través de la plataforma COFFEE, que ahora extrae automáticamente los metadatos de facturas electrónicas. CEOE y Cepyme ha valorado la mejora, aunque siguen pidiendo plazos de licitación más amplios para pymes.

España ha solicitado 17 000 millones adicionales en préstamos RRF destinados a hidrógeno, ciberseguridad y refuerzo de la industria de defensa dual. Bruselas ha concedido luz verde provisional, condicionada a hitos como la licitación de la red troncal de hidrógeno y la aprobación de una estrategia nacional de ciber resiliencia para infraestructuras críticas.

Para escalar start-ups deep-tech, el Ejecutivo ha creado un Fondo de Coinversión de 4 000 millones donde el Estado aporta la mitad y el capi-

tal privado la otra mitad. En junio, dos gestoras españolas y un fondo soberano árabe ha firmado cartas de intención por un total de 900 millones. El objetivo es acompañar rondas de serie B y C de compañías que desarrollen chips de potencia, baterías sólidas y bioplásticos avanzados.

La AIREF ha publicado su informe de seguimiento: celebra la mayor velocidad de pagos, pero exige métricas de productividad ligadas a cada PERTE. El Ministerio de Economía ha respondido que presentará indicadores de valor añadido bruto y empleo a final de año.



Fuente: <https://planderecuperacion.gob.es/>

En el plano regional, Andalucía y Galicia han replicado mecanismos de ventanilla única RRF y ha lanzado convocatorias para pymes turísticas y agroalimentarias. Algunas cámaras de comercio critican la dispersión, pero la Comisión valora la descentralización «ordenada».

Para el segundo semestre quedan hitos clave: demostradores de hidrógeno renovable, la primera subasta eólica marina y la licitación de corredores verdes. La Comisión ha advertido que el cuarto desembolso español dependerá de cumplirlos antes de diciembre. (Ver más en: <https://www.>

consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/13/recovery-and-resilience-fund-council-gives-green-light-to-amended-plans-of-the-netherlands-portugal-slovakia-and-spain/)

6. Mercado laboral y productividad

La EPA 2T-2025 ha situado el paro en el 12,1% (dato sin desestacionalizar), la temporalidad en mínimos históricos (14%) y el empleo femenino en récord de serie. Sin embargo, la productividad por hora trabajada apenas ha avanzado un 0,4%, lo que reabre el debate sobre capital humano y digitalización. (Ver más en: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/3-02072025-ap>)

La Estrategia de Competencias 2030 ha ampliado 200 000 plazas de FP Dual, sumando grados de mecatrónica, análisis de datos y mantenimiento eólico. Grandes empresas como Gestamp, Indra y Navantia han firmado convenios para acoger aprendices, mientras que las pymes reclaman ayudas para tutores internos.

Trabajo ha lanzado el piloto de semana laboral de cuatro días en 76 pymes industriales, cofinanciado con 8 millones de Next Gen. Los primeros datos, publicados en junio, muestran reducción del absentismo y mejora del bienestar sin merma de producción. El ministerio evaluará la extensión en noviembre, bien visto por los sindicatos y con cautela por la patronal.

La reforma de la Ley de Extranjería ha simplificado la contratación en origen de profesionales latinoamericanos en sanidad y cuidados de larga duración. Durante el semestre se han tramitado 4.500 permisos exprés, un alivio para comunidades con déficit de enfermería. Colegios médicos piden agilizar homologación de títulos para consolidar la medida.

Los salarios pactados en convenio han crecido de media un 3,2%, superando ligeramente la inflación anual. UGT y CCOO lo justifican como recuperación de poder adquisitivo; la CEOE alerta de posibles efectos en la competitividad exportadora si la productividad no acompaña.

Para remontar la productividad, los clusters de automoción y agroalimentario han lanzado plataformas 5G en vivo que monitorizan procesos y reducen mermas; la pyme tradicional es invitada a subirse al carro. El reto será escalar buenas prácticas sin perder capilaridad regional.

7. Autonomía digital y regulación tecnológica

Enero-junio ha sido el semestre de la aplicación plena del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y del Reglamento de Mercados Digitales (DMA).

La Comisión ha abierto expedientes de investigación a tres grandes plataformas por presunta falta de transparencia algorítmica. España, a través de la CNMC y la AEPD, ha colaborado aportando informes y datos de usuarios. (Ver más en: <https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/eu-tech-rules-not-included-us-trade-talks-eu-commission-says-2025-06-30/>)

El Gobierno ha iniciado en Baleares el piloto de la Identidad Digital Europea: la app permitirá almacenar documentos oficiales en el móvil de forma segura. La prueba, prevista hasta octubre, evaluará la usabilidad antes de expandirse al resto del país.

INCIBE ha reforzado la línea de asistencia 017 y ha inaugurado en León un centro de respuesta rápida para municipios, tras dos ataques ransomware que paralizaron ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en marzo. La cooperación público-privada ha mejorado notablemente, según los propios alcaldes.

En financiación, ENISA ha lanzado préstamos participativos ligados a métricas de impacto para startups deep-tech. Dos fondos de capital riesgo han obtenido garantías del Fondo Europeo de Inversiones, multiplicando su capacidad de coinversión. El sector valora que, sin ser «manna» americana, el ecosistema español gana densidad.

Los operadores de telecom, incentivados por fondos europeos, han acelerado el 5G rural. Para cumplir el umbral del 75% de cobertura en zonas despobladas en 2026, las autonomías compiten en adjudicar parcelas de espectro y despliegue de antenas antes de Navidad. Aragón y Castilla-La Mancha van en cabeza.

Mientras, el Consejo ha aprobado en mayo el Reglamento de Ciber Resiliencia, que exigirá requisitos de seguridad a todo producto conectado. España ha anunciado que creará un sello nacional de «ciber producto confiable», alineado con la norma europea.

8. *Transición energética y climática*

El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido en febrero la actualización del PNIEC, elevando la meta de renovables al 49% en consumo final bruto para 2030. Bruselas ha acogido con agrado la ambición y ha pedido cronograma de interconexiones para acompañarla. (Ver más en: <https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2025/20250221-aids-renewable-hydrogen-clusters.aspx>)

La primera subasta de eólica marina, celebrada el 11-VI en Cádiz y Gran Canaria, ha recibido ofertas de consorcios europeos y estadounidenses. Las adjudicaciones incluyen cláusulas de fabricación local y planes de transición justa para la pesca artesanal.

El corredor H2Med ha avanzado con la adjudicación de ingeniería básica en abril. La Comisión ha destacado el proyecto como pieza de la estrategia de 10 Mt de hidrógeno renovable en 2030. Portugal y España han acordado un calendario de inversión que movilizará 2 600 millones hasta 2027.

El Fondo Social para el Clima ha lanzado un piloto de rehabilitación energética en Andalucía y Extremadura: 5 000 hogares vulnerables recibirán ayudas para aislar viviendas y sustituir calderas de gasoil por bombas de calor. Las facturas energéticas han bajado ya un 25% de media.

Las eléctricas han desplegado tarifas dinámicas «horas-sol»: el precio cae hasta un 60% entre 12:00 y 16:00 h. La CNMC ha introducido un semáforo informativo para evitar confusión en los consumidores.

Por último, la Comisión ha pedido agilizar la repotenciación de parques eólicos antiguos. España, con 3 GW a punto de alcanzar fin de vida útil, ha simplificado permisos: los plazos se recortan de 24 a 9 meses si no se altera la huella ambiental. (Ver más en: <https://www.ree.es/en/press-office/press-release/news/press-release/2025/02/red-electrica-expands-information-electricity-system-to-adapt-it-ecological-transition>)

9. *Fiscalidad verde y sostenibilidad presupuestaria*

El Libro Verde sobre Fiscalidad Energética, publicado el 15-II, ha abierto una consulta amplia. España ha enviado sus observaciones: propone un calendario gradual para hidrocarburos, tasas de uso intensivo de recursos naturales y la reforma del impuesto de matriculación con criterios de CO₂ real. Fabricantes y ONG discrepan en los umbrales, pero coinciden en la necesidad de modernizar tributos. (Ver más en: https://taxation-customs.ec.europa.eu/archives/other-tax/e-green-taxation_en)

Hacienda ha creado un grupo de expertos que entregará recomendaciones antes de septiembre. Entre las ideas: bonificación extra para híbridos enchufables con autonomía eléctrica real superior a 80 km y recargo para vehículos de gran cilindrada sin etiqueta ecológica.

La Comisión, por su parte, ha iniciado un debate sobre excluir ciertas inversiones verdes del déficit. España ha defendido un sistema de verificación independiente para prevenir «green-washing contable». Suecia y Dinamarca temen sesgo moral; la discusión seguirá en el Ecofin informal de octubre.

En paralelo, el diseño del sistema ETS2, que gravará emisiones de transporte y edificación en 2027, ha avanzado. España reclama indexar el Fondo Social al poder adquisitivo regional, para no castigar la España vaciada donde el coche es imprescindible. Bruselas promete una fórmula mixta entre renta y densidad de población.

Finalmente, la presidencia polaca ha planteado una hoja de ruta sobre impuestos plásticos y combustibles sintéticos, asunto que encaja con la estrategia de autonomía industrial: incentivar materiales circulares para reducir la dependencia exterior.

10. *Integración financiera y Unión de Mercados de Capitales*

La Comisión ha presentado el 12-III el paquete CMU-2025. El punto de acceso único (ESAP) permitirá buscar información financiera de cualquier pyme europea desde 2026, reduciendo costes de due diligence. España ha valorado la herramienta como oportunidad para que las empresas familiares de tamaño medio diversifiquen su financiación.

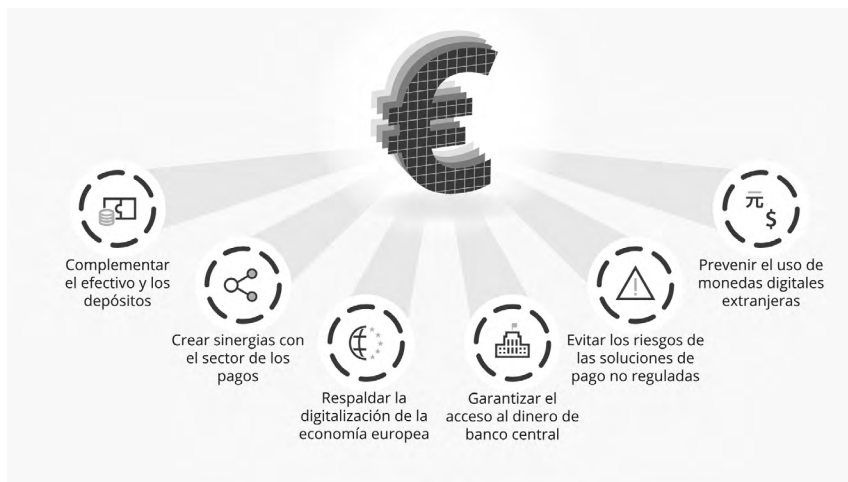
El BCE, por su parte, ha iniciado la fase de preparación del euro digital. El Banco de España ha testado liquidaciones de valores tokenizados en un sandbox europeo, logrando reducir el «time-to-settle» a segundos. Las fintech nacionales confían en que la moneda digital amplíe el mercado de pagos instantáneos.

Sigue pendiente el Fondo de Soberanía Europeo. España y Francia han defendido una emisión conjunta de eurobonos; Alemania prefiere redes nacionales con garantías europeas. La presidencia polaca ha propuesto un híbrido: deuda nacional con aval parcial de la UE. El debate se retomará en el Ecofin de septiembre.

La Autoridad Bancaria Europea ha pedido reforzar la supervisión macroprudencial. El Parlamento propone dotarla de poderes ejecutivos para intervenir bancos sistémicos; los ministros discutirán la propuesta reglamentaria a final de año.

Mientras tanto, la Comisión ha lanzado su iniciativa sobre tokenización de activos: certificados inmobiliarios, participaciones en fondos y bonos verdes podrán emitirse en cadena de bloques bajo un régimen piloto de cinco años. España ha anunciado que usará la plataforma Alastria para proyectos piloto con pymes. (Ver más en: <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/capital-markets-union-explained/timeline-capital-markets-union-explained/>)

El semestre cierra con la sensación de que la Unión de Mercados de Capitales avanza, pero a un ritmo que las start-ups deep-tech juzgan todavía lento. Quizá la llegada del euro digital y la tokenización masiva aceleren de forma decisiva la integración financiera.



Fuente: https://www.ecb.europa.eu/euro/digital_euro/report/html/index.es.html

Sobre el autor

Pablo Rodríguez Talavera es un académico español especializado en finanzas y economía, actualmente desempeñándose como profesor en la Deusto Business School de la Universidad de Deusto y en la Cámara Bilbao University Business School. Obtuvo una doble titulación en Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad de Deusto en 2017. Posteriormente, completó un Máster en Competitividad e Innovación en la misma institución además de un grado en Ciencia Política y de la Administración por la UNED.

En su rol docente, imparte asignaturas relacionadas con finanzas, economía y el panorama internacional en diversos programas académicos, incluyendo el Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), el Doble Grado en ADE y Derecho, y el Doble Grado en Relaciones Internacionales y Derecho.

Además de su labor docente, realiza actualmente sus estudios de doctorado sobre los estados del bienestar a nivel regional, y colabora en la revista Cuadernos Europeos de Deusto, donde analiza los desarrollos más recientes en la integración europea y las cuestiones económicas pertinentes para España dentro del contexto comunitario.

About the author

Pablo Rodríguez Talavera is a Spanish academic specializing in finance and economics, currently serving as a lecturer at Deusto Business School at the University of Deusto and Cámarabilbao University Business School. He earned a double degree in Business Administration and Industrial Technologies Engineering from the University of Deusto in 2017. He later completed a Master's in Competitiveness and Innovation at the same institution, as well as a degree in Political Science and Public Administration from UNED.

In his teaching role, he delivers courses related to finance, economics, and the international landscape across various academic programs, including the Bachelor's Degree in Business Administration (ADE), the Double Degree in Business Administration and Law, and the Double Degree in International Relations and Law.

Beyond his teaching duties, he is currently pursuing a PhD on welfare states at the regional level and collaborates with the journal *Cuadernos Europeos de Deusto*, where he analyzes the latest developments in European integration and economic issues relevant to Spain within the EU framework.